

Renta básica para hacer frente a la pobreza

La Red de Renta Básica, cuyo origen se encuentra en Catalunya, propugna una renta básica universal para ricos y pobres. Una iniciativa que suscita debate. «Las condiciones materiales de la Libertad» es un libro de Daniel Raventós, editado por El Viejo Topo, donde se desmenuza la iniciativa.

por Juanjo Basterra

Poner fin a la pobreza se está convirtiendo en una tarea muy difícil en este mundo dominado por el capitalismo despiadado y feroz. Los ricos necesitan a los pobres para que sirvan a sus propósitos: desregular las condiciones laborales, pagar salarios bajos y, además, trabajar mucho para elevar sus beneficios económicos minuto a minuto, día a día, mes a mes. Los organismos contra la exclusión social sirven de punta de lanza para intentar cambiar esta situación desequilibrante que permite, por ejemplo, que hasta el mes de setiembre doce bancos: Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banco Popular, Banesto, Sabadell, Banca March, Bankinter, Pastor, Valencia y Guipuzcoano hayan obtenido un beneficio neto diario de 63,4 millones entre enero y setiembre, o lo que es lo mismo 44.000 euros de beneficio al minuto. Esa cantidad representa dos veces el salario medio de los trabajadores vascos, pero supone que en un minuto los bancos logran una plusvalía seis veces y media mayor que el salario anual de quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y siete veces más que todo el sueldo de un año de los perceptores de la renta básica que obtienen quienes se encuentran en la pobreza y la exclusión social.

La Red de Renta Básica, que tiene su sede en Barcelona, trabaja desde hace años en un modelo que plantea una renta básica universal para todos, sin depender de su condición social ni económica. Eso sí, fija un modelo impositivo agresivo para aquellos que perciban por encima de ese mínimo y tengan unos ingresos económicos más abultados. «Las condiciones materiales de la Libertad» es un libro de Daniel Raventós, que ha publicado la editorial de El Viejo Topo recientemente. Raventós es presidente de la Red de Renta Básica, que es una sección del Basic Income Earth Network (BIEN). En el mismo, este economista y titular del departamento de Teoría Sociológica y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona hace un recorrido desde los griegos hasta nuestros días para establecer uno de los propósitos que tiene este modelo: «para ser libre hay que disponer de unos mínimos recursos económicos que garanticen la existencia».

Como indica en el prólogo, Antoni Domènech, miembro de esa red, han pasado diez años desde que Philippe van Parijs, filósofo y activista político, lanzara la idea de una renta básica de ciudadanía incondicional y universal, en el libro «Libertad real para todos» y veinte años, desde su «primer alegato sobre la renta básica». Domènech afirma, con un elevado grado de razón, que «el capitalismo ya no es lo que era. El de ahora es mucho más parecido al capitalismo depredador y desatado anterior a la Primera Guerra Mundial que al socialmente reformado y políticamente embridado de la segunda postguerra». Lamenta que en este terreno, «no sólo la Izquierda no ha conseguido pasar a la ofensiva como era la esperanza de nuestro amigo [Van Parijs], sino que ha seguido retrocediendo ella y avanzando con botas de siete leguas el programa neoliberal de destrucción de la ciudadanía social en Europa». Bajo esta perspectiva negativa, Daniel Raventós define la renta básica como «un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva». El autor reconoce que esa definición «es clara y provocadora», lo que en sí la hace «interesante», a su juicio, para persistir en ese debate social en torno a la propuesta. Una iniciativa de ERC e ICV a comienzos de octubre fue rechazada por el Congreso español.

Igual que otros colectivos, la Red de Renta Básica reconoce que el Estado de Bienestar del que ha presumido la Unión Europea se está desmoronando, debido a que la práctica neoliberal se está extendiendo como una mancha de aceite, lo que está provocando que quienes más tienen cada vez sean más poderosos y a la inversa. Cita al político francés del siglo XVIII Maximilien Robespierre quien aseguró, según relata Daniel Raventós, que «la gran desigualdad económica es la raíz de la destrucción de la libertad. Es la fuente de todos los males».

En el libro, Raventós asegura que la renta Básica es una respuesta «a la pobreza actual» y asegura que en la misma se encuentran también muchos trabajadores que reciben salarios que no sobrepasan el umbral de la

pobreza. «Los trabajadores pobres -dice- son aquellas personas que, a pesar de tener un contrato legal de trabajo, están por debajo del umbral de pobreza de su área geográfica de referencia». Según explica en su libro, «constituyen un fenómeno normal en el mercado laboral de Estados Unidos, pero no en el de la Unión Europea. Si el Estado de Bienestar existente en la mayor parte de países europeos, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, había podido excluir de la pobreza a las personas que disponían de un trabajo asalariado, desde hace al menos tres lustros esta situación ha cambiado». Aporta, en este caso, datos de que «el 3,6% de la población de la UE son working poor» (trabajadores pobres) y, lo que es «más significativo», el 10% de la población europea vive en hogares asalariados pobres». Eso quiere decir que en la UE hay «más de 35 millones de trabajadores pobres y están en el corazón de la zona mundial con mayor protección social». Entre las causas de esta situación, Raventós destaca la pérdida de los salarios reales «que han crecido por debajo de la productividad» y el aumento de la «precarización» del mercado laboral lo que ha supuesto que en los últimos quince años «el hecho de tener un trabajo ya no sea garantía de estar protegido contra la pobreza».

En base a ese argumento, el presidente de la Red de Renta Básica, señala que es necesaria y afirma que el cálculo realizado para Catalunya contiene tres supuestos, el intermedio supondría un coste de 8.756,4 millones con datos de 2003, pero el ahorro estimado alcanzaría los 9.248 millones, con el aumento en los ingresos de IRPF, porque «quienes tienen más tendrían que pagar más impuestos, pese a recibir la renta básica» y por el ahorro de las actuales pensiones por debajo de esa cantidad y los costes de tramitación. La Red de Renta Básica calcula el umbral de la pobreza en el 50% de la renta media per cápita, aunque el movimiento social Elkartzten considera que el SMI debe fijarse al 50% del PIB per cápita y el 37,5% para el salario social, porque es un modelo de cálculo «más adecuado».

Fechas para la memoria: pasos hacia un salario social

1 de enero: Desde 1982, en el estado de Alaska (EE UU) existe una renta básica instaurada. En el año 2000, entregaba 2.000 dólares a cada uno de los 700.000 residentes.

5 de Febrero: De 2001, se funda formalmente la Red de Renta Básica en Catalunya, y un año después es reconocida como sección del Basic Income Earth Network (BIEN).

2 de octubre: El Congreso de los Diputados del Estado español rechaza una iniciativa de ERC e ICV para instaurar una renta básica universal para el conjunto de ciudadanos.

7 de noviembre: El movimiento social para los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzten, fija en 958 euros mensuales el salario social, que debe ser el 37,5% del PIB.

16 de noviembre: El Parlamento Europeo aprueba por mayoría reclamar a la Comisión Europea y a los 27 estados que unifiquen un salario mínimo digno para combatir la pobreza.

17 de noviembre: Hace diez años en Barakaldo, el colectivo Berri-Otxoak abrió una oficina de información sobre las ayudas sociales. Ya han pasado 3.036 familias de Ezkerraldea.

La renta básica en Hego Euskal Herria está entre un 12% y un 20% por debajo del SMI

La «renta básica» que se entrega en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa alcanza el 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en Nafarroa, el 80%. El SMI español es un 40% inferior a la media de los existentes en la UE. Esas cantidades están muy alejadas del llamado umbral de la pobreza. Hace tan sólo unos días, el movimiento a favor de los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzten, hizo una propuesta en consonancia con las corrientes sociales europeas en las que se establece el mismo en el 37,5% del PIB per cápita, lo que para Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa supondría un salario social, como así lo denominan, de 958 euros mensuales en doce pagas.

Esa cantidad debería ir aparejada a un incremento del SMI, que a juicio de Elkartzten debería de situarse en el 50% de ese PIB, aproximadamente 1.270 euros en doce pagas en el caso vasco. El Gobierno español sitúa para el próximo año el SMI en 700 euros, es decir, una cantidad que es casi la mitad de la propuesta, pero baja más en los casos de las «rentas básicas» de Lakua y de Iruñea. Según los datos de la memoria del CES Vasco, 33.824 hogares percibieron esa renta, lo que supuso un aumento del 6,8% sobre el año anterior. Se gastaron 153,7 millones. Para 2008, están presupuestados 189 millones, «lo que supone un importe medio por unidad de convivencia de 461,21 euros al mes».

Esta misma semana, el colectivo Berri-Otxoak aseguró que en su centro de información de Barakaldo sobre renta básica y ayudas de emergencia social (AES) han pasado en diez años 3.036 familias a informarse de los trámites, «lo que significa que hay un problema en Ezkerraldea extendido».

Por otro lado, el Parlamento Europeo pidió el jueves que se establezca «un salario mínimo digno para toda la UE», para avanzar contra la pobreza. «Más de 78 millones de ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza y un 8% son trabajadores», certificó.

J. BASTERRA